INFORME SECRETARIAL: Palmira (V.) 11-sept.-2020. A despacho de la señora Juez, el trámite de consulta de desacato proveniente del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de El Cerrito (V.). Este expediente fue recibido el 10-sept.-2020 a las 9:06 a.m. mediante correo electrónico. Sírvase proveer.

ANGÉLICA MARÍA GARCÍA J.

Escribiente

Auto

Asunto:

CONSULTA DE INCIDENTE DE DESACATO

Accionante:

JOSÉ OCTAVIO FRANCO URIBE C.C. 6.229.518

Accionado:

COOMEVA EPS

Radicación:

76-248-40-89-001-2020-00354-01

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO

Palmira (V.) catorce (14) de septiembre de dos mil veinte (2020)

OBJETO DE ESTA PROVIDENCIA

Corresponde al despacho, resolver el grado de **CONSULTA** dentro del **INCIDENTE DE DESACATO** derivado de la ACCIÓN DE TUTELA promovida por el señor **JOSÉ OCTAVIO FRANCO URIBE** identificada con la CC. No. **6.229.518** del Cartago, (V.) contra **COOMEVA EPS**.

HECHOS Y TRÁMITE INCIDENTAL

El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de El Cerrito (V.) profirió la sentencia de tutela No. 07 del 25 de enero de 2018, mediante la cual dispuso tutelar los derechos fundamentales a la salud y a la vida del señor **JOSÉ OCTAVIO FRANCO URIBE** y por tanto le ordenó a **COOMEVA EPS** garantizar la ATENCIÓN INTEGRAL para la atención de la enfermedad TUMOR MALIGNO DE CARA Y CUELLO y servicio de TRANSPORTE en AMBULANCIA, situación que según reportó el accionante, no se está cumpliendo, dado que no le han autorizado lo ordenado a folio 26.

Una vez adelantó el respectivo trámite de desacato Juzgado dispuso la **sanción** contra la EPS mediante auto No. 592 del 8 de septiembre de 2020 (fol. 77-82) imponiéndole arresto por el término de UN (01) día y multa pecuniaria por 0.11 salarios mínimos legales mensuales vigentes y ordenó la consulta de la aludida providencia sancionatoria.

CONSIDERACIONES:

EL PROBLEMA JURÍDICO. ¿Se debe determinar si dentro de este incidente se configura un desacato a la sentencia de tutela No. 07 del 25 de enero de 2018 proferida por el Juzgado 1º Promiscuo Municipal de El Cerrito? ¿Si es procedente confirmar la sanción impuesta mediante auto No. 592 del 8 de septiembre de 2020 al funcionario de COOMEVA EPS? A lo cual se contesta en sentido **POSITIVO** conforme las siguientes razones.

El trámite de desacato es un mecanismo que busca que el juez constitucional, en ejercicio de su autoridad, sancione con arresto y multa a quien desatienda las órdenes de tutela mediante, y se encuentra regulado en los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991, consagrándose para dicho pronunciamiento el grado de consulta ante el superior jerárquico, sin necesidad de injerencia de las partes intervinientes, en orden a proteger sus intereses y garantizar el cumplimiento del debido proceso.

En ese sentido, al juez que conoce del grado de consulta, le compete verificar **si se ha surtido en legal forma el trámite correspondiente**, esto es, **sí se ha respetado el debido proceso y si se ha incumplido la orden de tutela**, lo cual debe valorarse bajo los parámetros de la responsabilidad subjetiva conforme lo prevé la Corte Constitucional (Sent. T-459 de junio 5/2003 M. P. Jaime Córdoba Triviño), por tanto, debe establecerse:

- (i) A quién estaba dirigida la orden.
- (ii) Cuál fue el término otorgado para ejecutarla.
- (iii) El alcance de la orden, para dilucidar si se cumplió o incumplió, de manera integral o parcial.

Ahora, teniendo en cuenta lo enunciado y revisado el caso del actor **JOSÉ OCTAVIO FRANCO URIBE** vemos que fueron agotadas cada una de las etapas procesales establecidas que permiten garantizar el derecho a la defensa de la EPS Coomeva, que se logra probar que la parte incidentada fue debidamente notificada de cada providencia proferida por el Juzgado A Quo, mediante el correo electrónico autorizado por la entidad, para recibir notificaciones judiciales, pues obra prueba de haber enterado de cada uno de los autos a la EPS, lo cual quiere decir que el sancionado sí conoció de la existencia del trámite incidental, sin embargo, al dar respuesta al trámite indicaron que estaban dando trámite a lo pedido y solicitaron la suspensión del desacato, situación que no tiene asidero, luego no hay mérito para

declarar alguna nulidad.

Ahora bien, se debe tener en cuenta que la **sentencia de tutela No. 07 del 25 de enero de 2018** fue emitida en favor de **JOSÉ OCTAVIO FRANCO URIBE** por considerar vulnerado su derecho a la salud, una persona con una enfermedad catastrófica, situación que la accionada ha obviado durante el trámite incidental, sin tener en cuenta la orden contenida en la aludida sentencia.

Sobre el particular se observa que el accionante reiteró el incumplimiento, dado que a la fecha no ha conseguido que la EPS autorice el servicio de TRANSPORTE en AMBULANCIA que requiere para acudir a las citas de quimioterapia. **Sin embargo;** a folio 13 del expediente físico (escaneado corresponde al número **26**) se lee que ya el médico oncólogo tratante modificó la orden de modo; que el accionante sí requiere del servicio de transporte redondo (ida y regreso desde su casa a la sala de quimioterapia) pero **no** en ambulancia. No en ambulancia medicalizada. A su vez a folio 3 del expediente escaneado se lee que con fecha agosto 14 de 2020 el accionante se queja de no haber recibido el servicio de transporte y haberlo tenido que pagar por si mismo lo cual da a entender que no le ha sido prestado en forma alguna.

En ese sentido, encuentra la instancia que efectivamente fue acertada la decisión emitida por el juez *a quo*, pues no ha sido cumplida la orden contenida en la sentencia No. 07 del 25 de enero de 2018, que fue concreta a saber **ATENCIÓN INTEGRAL para la ENFERMEDAD TUMOR MALIGNO DE CARA Y CUELLO y servicio de TRANSPORTE y pese a haber requerido la EPS para el cumplimiento, tal cosa no ocurrió**, aunado al hecho de que se ha incurrido en demoras injustificadas para ello, pues lo contrario no fue demostrado.

También se debe tener en cuenta cómo la información obrante en este plenario permite asumir que el fallo no ha sido cumplido en la forma ordenada, ni se acreditó una situación que justifique la omisión, ni se probó una conducta proactiva tendiente a acatar el fallo judicial, dicha situación da razones suficientes por la cuales esta instancia confirmará la decisión tomada por el juez *a quo*, en aras de que hacer efectivo el amparo constitucional otorgado en favor de JOSÉ OCTAVIO FRANCO URIBE, de modo que el fallo citado no sea objeto de dilaciones injustificadas, ya que la competencia del juez constitucional en todo caso es asegurar el cumplimiento de las órdenes dadas.

LA TASACIÓN DE LAS SANCIONES. Siendo así las cosas, se tiene que

J.02.CC Palmira
Consulta de desacato 2020-00354-01
Auto confirma auto sancionatorio

efectivamente hay lugar a la confirmación de la sanción impuesta de arresto, que no existe mérito para modificar las sanciones impuestas por auto No. 592 del 8 de septiembre de 2020. Así en lo relativo a la naturaleza económica, cabe enunciar que resulta acorde con lo asentado por el Tribunal de este distrito, en cuanto que la sanción privativa de la libertad debe estar conforme con la sanción pecuniaria, lo cual va de acuerdo con el artículo 52 del decreto 2591 de 1991, por eso no se hará reparo al respecto.

En mérito de lo expuesto el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Palmira, Valle del Cauca,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el auto No. 592 del 8 de septiembre de 2020 proferido por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de El Cerrito, (V.) mediante el cual sancionó a **GERMÁN AUGUSTO GAMEZ URIBE** en su condición e responsable del cumplimiento de los fallos de tutela en **COOMEVA EPS**, dentro del incidente de desacato promovido por el señor **JOSÉ OCTAVIO FRANCO URIBE** identificado con la C.C. No. **6.229.518** del Cartago, (V.), conforme a las consideraciones indicadas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: NOTÍFIQUESE a las partes la decisión aquí adoptada y retorne este expediente al despacho de origen.

CUMPLASE,

Firmado Por:

LUZ AMELIA BASTIDAS SEGURA
JUEZ

JUEZ - JUZGADO 002 DE CIRCUITO CIVIL DE LA CIUDAD DE PALMIRA-VALLE DEL CAUCA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **9be7fb8d7cf14f08ee979f8b1134244bdea9089210e5e61faf06dcc51e5a18a4**

Documento generado en 14/09/2020 07:12:38 a.m.